

Señales en seguridad pública

El Ejecutivo ha resuelto exceptuar al Ministerio de Seguridad Pública del recorte parejo del 3% del presupuesto que instruyó aplicar a todos los ministerios y reparticiones públicas. La disminución de fondos de la cartera, por más de \$ 72 mil millones, fue criticada por la oposición y sectores del oficialismo debido a que colisionaba con la oferta de un Gobierno que situaba a la seguridad pública como una de sus prioridades programáticas.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, aseguró el lunes que no solo no habrá recortes, sino que se avanzará en la “inyección de recursos frescos” para responder a las necesidades de las policías. Ayer el Presidente Kast insistió en que la regla general de podar el gasto público se mantiene, pero que cada ministerio “está compartiendo sus dificultades” respecto de la ejecución de esa medida en reuniones bilaterales con la cartera de Hacienda.

Aunque distintos expertos han explicado que, por causa de la rigidez del erario, los dineros deberían retornar a los subtítulos donde estaban asignados, también han demandado reexaminar la composición del gasto en seguridad, las inversiones, los

“La prioridad de esta área en la retórica del Gobierno no se ha materializado en políticas públicas”.

programas mal evaluados e identificar las áreas donde el uso de los recursos sea más efectivo.

El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, ha subrayado la prevención temprana, la reinserción y la política penitenciaria, más que la adquisición de equipamiento. A juicio del exsenador Felipe Harboe, actual investigador de la USS, se precisa robustecer la unidad de crimen organizado y, en especial, la meta de bajar la tasa de homicidios.

La campaña del Presidente Kast se estructuró en dos ejes: la recuperación del crecimiento y del empleo, y la seguridad pública; en un lugar más subordinado, la promesa de controlar la inmigración irregular. En este contexto, la merma de fondos para seguridad iba en una dirección contraria a las expectativas.

La flexibilización debería contribuir a que la cartera comience a desplegar su plan

de seguridad pública, un aspecto donde ciertamente la ministra Steinert todavía está al debe.

Para una administración que hizo del reclamo ciudadano por seguridad pública uno de los pilares de la estrategia que le permitió ganar, lo esperable hubiese sido asumir con una plataforma clara de propuestas, acciones y objetivos factibles de evaluar en sus resultados. Sin embargo, hasta ahora ello no se ha materializado en políticas públicas.

Desde luego que tampoco ha ayudado al control de la agenda la controversia sobre la participación de la ministra en el llamado a retiro de la subdirectora de Inteligencia de la PDI: el caso está en el radar del Congreso y de la Contraloría. Ayer se informó, además, que Steinert desmanteló la Unidad Estratégica de Seguridad del ministerio, encargada de la creación de un sistema de datos y de análisis criminal, porque su labor se duplicaría con la de otro departamento.

El compromiso que el Gobierno adquirió en materia de seguridad pública demanda que explicité con prontitud la estrategia global y los instrumentos con que enfrentará la criminalidad, más allá de la retórica de un cambio.